LA FUERZA VINCULANTE DE LOS ACUERDOS PROBATORIOS EN EL PROCESO PENAL MEXICANO: ¿PUEDE EL JUEZ APARTARSE DE ELLOS?

ITZEL LUIS ORTIZ*

SUMARIO

INTRODUCCIÓN. 1.LA CARGA DE LA PRUEBA 1.1. Naturaleza de la carga de la prueba 1.2. Sujetos sobre los que recae: Ministerio Público y ¿defensa? 2. LOS ACUERDOS PROBATORIOS 2.1. Concepto y naturaleza jurídica 2.2. Objeto de los acuerdos probatorios 2.3 Principales errores en la construcción de los acuerdos probatorios 3. LA FUERZA VINCULANTE DE LOS ACUERDOS PROBATORIOS Y EL ROL DEL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO 3.1. Deber de motivar las sentencias frente a los acuerdos probatorios 3.2 ¿Puede el juez apartarse de un hecho acordado? **CONCLUSIONES.**

INTRODUCCIÓN

El proceso penal en México, reformado estructuralmente en el año 2008, adoptó un sistema acusatorio, oral y adversarial que privilegia principios como la inmediación, contradicción, publicidad, concentración y continuidad. Dentro de este nuevo paradigma, el rol de las partes se transforma radicalmente, especialmente en materia probatoria, donde se reconoce su autonomía para convenir ciertos aspectos del debate a través de figuras como los acuerdos probatorios.

Estos acuerdos, permiten que las partes reconozcan como ciertos, hechos que no requieren ser probados, dispensando a quien los propone de la carga de probarlos a través de los medios de prueba legales en la etapa de juicio oral, ello con la finalidad de agilizarlo y concentrar el debate en los puntos realmente controvertidos. No obstante, su utilización ha generado una discusión jurídica significativa: ¿Hasta qué punto vinculan al juez? ¿Está este obligado a incorporar los hechos acordados como verdaderos en su sentencia, o conserva la facultad de apartarse de ellos cuando advierta posibles inconsistencias o afectaciones a la verdad procesal?

Estas interrogantes se vuelven aún más relevantes cuando el juez de enjuiciamiento se enfrenta al deber de motivación judicial, al principio de presunción de inocencia y al estándar probatorio que exige una convicción más allá de toda duda razonable.

El objetivo general de este trabajo es analizar la fuerza vinculante de los acuerdos probatorios en el proceso penal mexicano y determinar si el juez de enjuiciamiento puede válidamente apartarse de ellos al dictar sentencia, sin vulnerar los derechos procesales de las partes ni los principios rectores del sistema penal.

1. LA CARGA DE LA PRUEBA

1.1. Naturaleza de la carga de la prueba

En primer término, debemos destacar que cuando se habla de la carga de la prueba la doctrina señala la existencia de dos dimensiones o sentidos, el primero de ellos es en sentido objetivo y responde a la pregunta ¿quién pierde si no hay prueba suficiente? En cambio, la dimensión subjetiva, responde a la pregunta sobre qué parte debe aportar prueba al procedimiento.¹

De hecho, al analizar la génesis de por qué surge cada una de ellas nos damos cuenta de que ambas se encuentran íntimamente ligadas e inclusive la dimensión subjetiva deriva de la objetiva pues la parte que cuenta con algún grado de probabilidad de perder un asunto al no existir prueba suficiente se verá obligada a aportar esa prueba para evitar la consecuencia inmediata.

Sin embargo, esta distinción ha perdido peso doctrinariamente cuando se habla de un sistema de valoración libre de la prueba, donde el juzgador ya no se encuentra atado a reglas fijas para determinar la verdad de los hechos, sino que goza de libertad para apreciar las pruebas conforme a criterios de racionalidad y lógica. En ese contexto, el principio de libre valoración tiende a diluir la rigidez de las cargas procesales, sin que ello implique desconocer su importancia como guía en la distribución de responsabilidades probatorias entre las partes.

1.2. Sujetos sobre los que recae: Ministerio Público y ¿defensa?

En México, por mandato constitucional el Ministerio Público tiene la obligación de dirigir la investigación de los delitos y de acuerdo con el código adjetivo penal en su numeral 130 la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal.²

Ahora bien, en el caso de la defensa la discusión doctrinal se centra si esta asume o no de alguna forma la “carga” de probar, así como en determinar en qué casos estaría obligada a aportar elementos de prueba. Al respecto se ha sostenido que cuando la defensa alega causas de justificación o de exclusión del delito, debe acompañar dichas afirmaciones con prueba que las justifiquen.³

No obstante, es importante subrayar que, desde la perspectiva del imputado, la posibilidad de aportar prueba debe entenderse principalmente como un derecho y no como una obligación procesal. En otras palabras, el ejercicio de presentar medios de prueba en favor de su inocencia forma parte del derecho de defensa y no constituye una carga en sentido

¹ FERRER BELTRÁN, J., “*La decisión probatoria*” Manual de razonamiento probatorio, México, 2023, p.405.

² Artículo 130 Código Nacional de Procedimientos Penales: Carga de la prueba. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal

³ DEVIS ECHANDÍA, H., *Teoría general de la prueba judicial*. Tomo I. Editorial Temis, Colombia, p. 220.

estricto⁴. Además, basta con que la prueba ofrecida por la defensa genere una duda razonable en el juzgador para que se dicte una sentencia absolutoria.⁵

2. LOS ACUERDOS PROBATORIOS

2.1. Concepto y naturaleza jurídica

Los acuerdos probatorios son una figura procesal, mediante la cual el Ministerio Público y la Defensa convienen sobre la veracidad o existencia de determinados hechos que no requieren debate probatorio. Esta figura tiene cabida en la fase intermedia, una vez cerrada la investigación complementaria y se hará patente en la etapa de Juicio Oral.

En el proceso penal mexicano, los acuerdos probatorios se encuentran regulados en el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual los define como *aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias*. Su validez requiere que el Juez de Control los autorice siempre y cuando existan antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho o hechos acordados.

La naturaleza que se atribuye a los acuerdos probatorios responde a una doble finalidad, pues por una parte constituye una herramienta estratégica de la que disponen las partes para sustentar su teoría del caso y también es un elemento despresurizador de la actividad jurisdiccional⁶. De tal forma que una de las principales consecuencias procesales de los acuerdos probatorios es relevar de la carga de la prueba a la parte que en condiciones ordinarias debía demostrar el hecho acordado. Es decir, al aceptarse como cierto un hecho, este deja de estar sujeto a controversia y ya no requiere ser probado en juicio, lo cual modifica el alcance de la actividad probatoria y reduce el tiempo y los recursos destinados al juicio oral.

2.2. Objeto de los acuerdos probatorios

Es pertinente establecer que, si bien el tema sobre qué puede o no ser objeto de convención probatoria no se encuentra plenamente desarrollado en la legislación nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el acuerdo probatorio versa sobre *hechos* y no sobre los *medios de prueba* en sí mismos.

⁴ FIX ZAMUDIO H., *Los medios de prueba en el proceso penal*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2010. p. 37.

⁵ PÉREZ MANCERA J.R., *Derecho procesal penal mexicano*, México, 2015, pp. 145–146.

⁶ RODRÍGUEZ CAMPUZANO A., *Los acuerdos probatorios como mecanismo de despresurización de la controversia y su impacto en la etapa de juicio oral*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2016. p. 124

Por lo anterior, se toma como punto de partida, que cuando nos referimos a los *hechos* estos se traducen en las proposiciones fácticas que puedan ser aceptadas por el Ministerio Público y la Defensa – sin oposición fundada de la víctima - como verdaderas, sin requerir actividad probatoria, por su parte los *medios de prueba* son instrumentos destinados a acreditar la veracidad de un hecho. Las pruebas tienen un carácter instrumental y su eficacia dependerá de la forma en que el litigante lleve a cabo su desahogo en audiencia de Juicio Oral, conforme a los principios de contradicción, inmediatez y publicidad.⁷

Ahora bien, no todos los hechos pueden ser materia de un acuerdo probatorio. Existen límites que restringen su alcance en aras de proteger el debido proceso, en ese sentido, no pueden ser objeto de acuerdo probatorio los hechos esenciales del tipo penal, tales como la autoría, la participación, el dolo, la culpa, el nexo de causalidad, ni tampoco aquellos que comprometan la responsabilidad penal del acusado.

2.3 Principales errores en la construcción de los acuerdos probatorios

Aún y con la utilidad procesal de los acuerdos probatorios, en la práctica se han identificado algunos errores en su elaboración y autorización, lo cual incide directamente en la determinación que adopte el juzgador al momento de emitir su sentencia. Estos errores suelen ser producto de una comprensión limitada del alcance y la naturaleza de esta figura procesal, así como del uso inadecuado del lenguaje jurídico y probatorio.

Uno de los errores más comunes en la construcción de los acuerdos probatorios es la redacción vaga o ambigua del hecho acordado, sin la debida precisión respecto de circunstancias esenciales como el tiempo, el lugar, los sujetos u objetos involucrados imprecisión que genera incertidumbre jurídica y dificulta la labor del juez al momento de valorar el hecho sometido a su consideración, ya que se ve obligado a confrontar la información ambigua contenida en el acuerdo con aquella desahogada durante el juicio oral. Esta contradicción entre lo acordado y lo probado puede comprometer la claridad del juicio, e incluso conducir a una sentencia absolutoria cuando la duda razonable favorece al imputado.

Otro error frecuente consiste en pretender acordar hechos que no son susceptibles de convención probatoria, como los elementos esenciales del tipo penal, la responsabilidad del imputado, o circunstancias que requieren ser necesariamente probadas mediante medios legales específicos. Como se analizó previamente, estos hechos forman parte del núcleo controvertido del juicio y su aceptación por las partes no exime al juez de valorarlos conforme a las reglas del debido proceso y la sana crítica.

⁷ Artículo 4o. Código Nacional de Procedimientos Penales. Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediatez y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes.

Una diversa equivocación consiste en someter a acuerdo probatorio objetos y no así hechos, lo cual son cosas distintas pues los objetos no hacen por sí solos verdaderas o falsas a nuestras creencias o afirmaciones, y dado que la finalidad de la prueba – en los casos centrales – es establecer la probable verdad de ciertas afirmaciones, entonces las cosas particulares, por sí mismas, no pueden ser objeto de la prueba. Lo que puede probarse es la *existencia* de un objeto – que si es un hecho – pero no, el objeto en sí.⁸ Ejemplificando este punto, en el año 2024, en el Estado de México, un Juez de Distrito al resolver el fondo de un asunto puesto a su consideración por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo, en el cual las partes habían celebrado acuerdos probatorios mencionó: *De acuerdo con el auto de apertura a juicio, las partes llegaron a acuerdos probatorios: respecto de la existencia de la pipa en la cual era transportado el hidrocarburo, su cantidad y tipo; el lugar en que aconteció la detención del acusado y los elementos que participaron en ella; así como la copia de la factura que ampara la cantidad de 11,000 litros de gas LP (entendida esta última en el sentido de tener como probado el hecho que contiene el documento y no a la prueba en sí misma). De modo que los elementos de la conducta a probarse durante el juicio son la posesión de 11,875 litros de gas LP y la falta de autorización para ello.* De dicha transcripción podemos advertir cómo en el último de los casos se acordó probatoriamente un objeto y no así un hecho, evidenciando el Juez que el acuerdo probatorio se encontraba estructurado de manera equivocada.

Además de los errores previamente señalados, se suma uno de los más preocupantes: cuando los acuerdos probatorios resultan contrarios a la prueba desahogada en juicio, pues si bien el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece expresamente que el Juez de Control sólo podrán autorizar dichos acuerdos, *siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho* en la práctica esto no siempre cumple, en lo personal atribuyo este problema principalmente a un descuido o negligencia del que propone el acuerdo pues sería ilógico que -Fiscalía o Defensa- ofrezcan un acuerdo probatorio respecto de hechos que no guardan congruencia con los antecedentes de investigación.

A su vez, la contraria, actuando bajo el principio de lealtad, debería verificar la congruencia del acuerdo propuesto antes de aceptarlo y en caso de advertir inconsistencias con el material probatorio, ponerlo en conocimiento para permitir su corrección, en caso de no hacerlo, esta omisión sería bastante grave porque al aceptarse el acuerdo probatorio, se genera en automático el relevo de prueba, lo cual implica el desistimiento del perito o testigo que habría de declarar sobre ese hecho en juicio, teniendo un impacto trascendental pues ya no se contará con el medio de prueba que pueda enmendar el error cometido lo que puede afectar el sentido de la sentencia.

⁸ GONZÁLEZ LOGIER, D., “Prueba hechos y verdad” Manual de razonamiento probatorio, México, 2023, p.7.

3. LA FUERZA VINCULANTE DE LOS ACUERDOS PROBATORIOS Y EL ROL DEL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO

3.1. Deber de motivar las sentencias frente a los acuerdos probatorios

Uno de los pilares del sistema penal acusatorio es el deber de fundamentar y motivar las resoluciones que dicte el juez, en especial aquellas en que se resuelva respecto de la culpabilidad o inocencia del acusado.

Por un lado, cuando hablamos de fundamentación nos referimos al deber de exponer el fundamento legal en el que se apoya la autoridad para tomar su decisión, mientras que la motivación estriba en establecer de manera clara y lógica las razones por las cuales el juzgador arribó a su determinación.

Es importante resaltar que la obligación de motivar una sentencia no se ve soslayada con la existencia de los acuerdos probatorios, sin embargo, si se introduce una dinámica diferente, pues previo al juicio se eliminó la necesidad de desahogar prueba sobre ciertos hechos que componen la acusación, los cuales las partes acordaron tener por acreditados, es por ello que, el juez se ocupará de valorar las pruebas que han sido desahogadas en su presencia administrándolas en su sentencia con la información que fue materia de acuerdo probatorio.

Cabe resaltar que el hecho de que se suscriban acuerdos probatorios no implica per se el dictado de una sentencia condenatoria pues con su aceptación las partes únicamente pretenden agilizar el desahogo del juicio centrándose en aquellas cuestiones que realmente sean controvertidas, como la responsabilidad penal del acusado, la ausencia del dolo, entre otras cuestiones.

3.2 ¿Puede el juez apartarse de un hecho acordado?

La pregunta de si es posible o no que el juez de enjuiciamiento se aparte de un hecho acordado, ha sido pocas veces abordada, aún y cuando como ya se explicó en el apartado 2.3 en la práctica existen múltiples errores en su construcción, que - pudieran o no - incidir en la resolución de fondo de un asunto.

Citando un ejemplo, en el año 2020, en el Estado de México el cuarto tribunal colegiado en materia penal analizó el amparo directo 97/2020 puesto a su consideración en el que en la sentencia de primera instancia se había absuelto a una persona por el delito de abuso sexual infantil, las razones por las cuales la juez arribó a dicha determinación no guardan relación con el tema que se expone en el presente trabajo final, sin embargo, es de destacarse que en el asunto se suscribió un acuerdo probatorio referente a la edad que tenía la víctima al momento de la comisión del hecho, acordándose que ésta contaba con la edad de siete y no cinco años en el momento de la comisión del hecho delictivo, de tal forma que, al percatarse de dicho error, el acuerdo probatorio fue “aclarado” por la sala que conoció en segunda instancia del asunto aduciendo que *“más allá de la confusión que pudo haberse generado entre las partes -al parecer la edad se refería al momento de celebrar el acuerdo probatorio,*

no podía tenerse por cierta una edad de la menor víctima al momento de los hechos que implicara dos años de diferencia, en forma contraria a los antecedentes de investigación y al mundo fáctico” y en consecuencia se emitió la tesis aislada con número de registro 2024409, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, de la Undécima Época de rubro:

ACUERDOS PROBATORIOS. LOS CELEBRADOS ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL ACUSADO, SIN OPOSICIÓN FUNDADA DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO, DEBEN REFERIRSE A HECHOS VERACES, LÓGICOS, RAZONABLES, ADEMÁS DE SER CONGRUENTES CON LOS ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.

Hechos: El Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima, celebraron un acuerdo probatorio consistente en tener por acreditada la edad de ésta al momento de los hechos imputados. Sin embargo, dicha edad no correspondía a la real, al comparar su fecha de nacimiento asentada en el acta respectiva y el simple transcurso del tiempo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que un hecho acreditado mediante acuerdo probatorio debe ser veraz, lógico, razonable y congruente con los antecedentes de la investigación.

Justificación: Conforme al artículo [345 del Código Nacional de Procedimientos Penales](#), mediante acuerdos probatorios el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, pueden convenir para tener por probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias, los cuales deben ser autorizados por el Juez de Control cuando se justifiquen por existir antecedentes en la investigación con los que se acrediten determinados hechos. Dichas exigencias implican que el hecho que se tenga por probado debe resultar veraz, lógico y congruente; a contrario sensu, no pueden tenerse por demostrados hechos falsos, ilógicos e incongruentes, dado que los que se tengan por ciertos no serán objeto de debate en la audiencia de juicio. Es decir, el hecho derivado del acuerdo probatorio debe ser constatable en el mundo fáctico, lo que significa que no puede ir más allá de la lógica, la razonabilidad, ni de los antecedentes de la investigación pues, en caso contrario, resultaría inválido, aunque el Juez hubiere tenido por autorizado el respectivo acuerdo probatorio.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 97/2020. 10 de diciembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: José Trejo Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de abril de 2022 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Dicha tesis, aún y cuando no es de observancia obligatoria, si es orientadora, pues expone la posibilidad de enmendar, corregir o “aclarar” un acuerdo probatorio.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿Qué hubiera sucedido si el asunto antes indicado no tuviera como víctima a una persona que, además de ser mujer es una niña, contexto en el que la perspectiva de género cobra especial relevancia? Pongamos un ejemplo, en un asunto de portación de arma de fuego en que el hecho se hace consistir en que en determinadas circunstancias de tiempo y lugar, “SAID” portó un arma de fuego tipo escopeta, calibre 12 GA, marca Savage Arms, modelo Stevens 94 Series K, Matrícula **PA84820**, de origen estadounidense, con sistema de disparo de tiro a tiro, se acordó probatoriamente⁹ en etapa intermedia – la existencia del arma señalando exactamente las mismas características, **salvo** por la matrícula, que se identificó como **PAB4B20**.

Este pequeño, pero significativo detalle revela un problema de fondo: aunque las demás especificaciones del arma coincidan, la matrícula constituye un elemento individualizador

⁹ Por descuido, negligencia, falta de cuidado, confusión o incluso por qué no corrupción.

único, pues dos armas pueden compartir modelo, marca, calibre, tipo y sistema de disparo, pero nunca una matrícula, lo que hace que dicho error afecte la certeza del hecho acordado. La suscripción de un acuerdo probatorio con este tipo de imprecisiones genera diversas problemáticas procesales. El primer inconveniente que nos encontramos consiste en la falta de identidad del objeto material del delito, ya que el acuerdo probatorio validó la existencia de un arma de fuego distinta a la señalada en la acusación. El segundo problema radica en que al suscribirse el acuerdo probatorio se produjo un relevo de prueba, lo que implica el desistimiento de los medios de prueba originalmente ofrecidos para acreditar la existencia del arma en juicio como podría ser la declaración del perito en balística forense y del policía que llevó la inspección ocular del objeto.

En consecuencia, incluso si en los antecedentes de la investigación se encontrara el dato correcto de la matrícula, el error cometido en el acuerdo probatorio no podría ser enmendado durante el juicio oral, ya que el órgano de prueba que sería de utilidad para aclararlo ha sido excluido por voluntad de las partes. Esta situación coloca al juzgador ante una situación compleja pues por un lado no cuenta con prueba que justifique determinada proposición fáctica que erróneamente fue acordada y por el otro, resulta evidente que en la suscripción se cometió un error, sin embargo, no existe algún mecanismo legal que pueda enmendarlo y con ello evitar que se cumplan con los fines del proceso penal.

Es por lo anterior, que podemos concluir que, si es jurídicamente posible que el juez de enjuiciamiento se aparte de un hecho acordado por las partes, siempre que dicha decisión se encuentre debidamente fundada y motivada pues no son inmunes al control judicial y su validez está condicionada.

No obstante, en un proceso penal cuyo objeto – según lo expresa el Código Nacional de Procedimientos Penales – es esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, cabe preguntarse ¿Qué tan justo resultaría permitir que un error en la suscripción de un acuerdo probatorio involuntario o negligente determine el sentido de una sentencia? Esta interrogante da lugar a señalar que no se trata simplemente invalidar acuerdos por formalismos, sino de garantizar que la sentencia sea justa.

Se dice lo anterior pues, desde el momento en el que al imputado se le comunica que existe una investigación penal en su contra, las pruebas¹⁰ que obran en la carpeta dejan de ser

¹⁰ En el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales se realiza una distinción entre datos de prueba, medios de prueba y pruebas, a saber: El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como

exclusivas del órgano investigador y pasan a ser accesibles para ambas partes, en ese contexto, enmendar un error cometido en la suscripción de un acuerdo probatorio celebrado en etapa intermedia, cuando dicho acuerdo se refiere a hechos que están debidamente respaldados en los antecedentes de la investigación, no daría lugar a que de alguna manera se vulneraran los Derechos Humanos de la persona acusada, ya que éste ha tenido pleno conocimiento de los registros que integran la carpeta desde el inicio del procedimiento.

Además, si la finalidad del acuerdo probatorio fue, precisamente, descongestionar el juicio y centrar el debate en los hechos controvertidos, resultaría cuestionable – e incluso contrario al principio de buena fe - que la parte que inicialmente aceptó el acuerdo pretenda desconocerlo posteriormente con base en un error meramente formal, cuando conoce perfectamente el contenido sustancial de los hechos acordados.

Es por lo anterior que ante la ausencia de una disposición expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales que permita dirimir este tipo de controversias, resulta necesaria la incorporación de una regulación específica que establezca, de manera clara la posibilidad de solicitar la corrección, aclaración o incluso la nulidad de un acuerdo probatorio antes del inicio del juicio oral, esto se realizaría ante el juez de control con la finalidad de que el juez de enjuiciamiento no se vea contaminado por la motivación que exponga la parte que solicita la corrección o nulidad del acuerdo probatorio.

A manera de propuesta, se considera viable adicionar al Código Nacional de Procedimientos Penales el siguiente texto:

Artículo 345 Bis CNPP. Corrección de acuerdos probatorios

Cuando con posterioridad a la celebración de un acuerdo probatorio, cualquiera de las partes advierta la existencia de un error material, de forma o fondo que pueda afectar su validez, interpretación o congruencia con los antecedentes de investigación, podrá solicitar su corrección, aclaración o invalidez antes de iniciado el juicio.

La solicitud de audiencia deberá plantearse ante el juez de enjuiciamiento a quien le corresponda conocer del juicio oral, quien a su vez devolverá el asunto en un plazo máximo de 3 días ante el juez de control quien será el encargado de resolver su procedencia.

A la audiencia se citará a todas las partes, sin embargo, la ausencia de la víctima o su asesor que hayan sido debidamente notificados no será impedimento para la celebración de la audiencia, a menos que dicha parte sea quien haya solicitado la corrección, aclaración o invalidez del acuerdo probatorio, en ese caso se dará la oportunidad de que justifique su inasistencia y por única ocasión se podrá realizar una nueva citación.

El juez resolverá a solicitud con base en los antecedentes de la investigación y en caso de ser procedente, terminada la audiencia devolverá el auto de apertura a juicio oral con la corrección, aclaración o invalidez correspondiente de o los acuerdos probatorios.

elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. No obstante, señalaremos – pruebas – en sentido amplio.

CONCLUSIÓN

A lo largo del presente trabajo se analizó la figura de los acuerdos probatorios en el proceso penal mexicano, destacando su utilidad práctica para centrar el debate en los hechos verdaderamente controvertidos y su impacto en la eficacia del juicio oral. No obstante, se han evidenciado diversas problemáticas en su suscripción, especialmente cuando contienen errores que comprometen la certeza sobre hechos relevantes para la toma de decisión.

En ese contexto, quedó demostrado que si bien los acuerdos probatorios tienen una fuerza vinculante entre las partes, esta no es absoluta, ya que no se encuentran exentos del control judicial pues el juez de enjuiciamiento puede apartarse de un hecho acortado siempre y cuando su decisión esté debidamente fundada y motivada, sin embargo permitir que errores meramente formales o involuntarios determinen el sentido de una sentencia, puede resultar abiertamente injusto y contrario a los fines del proceso penal acusatorio, es por ello que se vuelve imprescindible establecer un mecanismo legal que permita a las partes solicitar la corrección, aclaración o invalidez de un acuerdo probatorio antes del juicio, ello sin vulnerar los derechos de las partes ni afectar el principio de contradicción.

La propuesta normativa presentada en este trabajo de fin de máster busca llenar ese vacío legal mediante una regulación específica que preserve la función despresurizadora de los acuerdos probatorios sin comprometer la obtención de una sentencia justa, esperando que algún día pueda materializarse o al menos resonar la idea en la mente de algunos juristas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

FERRER BELTRÁN, J., “*La decisión probatoria*” Manual de razonamiento probatorio, México, 2023, p.405.

DEVIS ECHANDÍA, H., *Teoría general de la prueba judicial*. Tomo I. Editorial Temis, Colombia, p. 220.

FIX ZAMUDIO H., *Los medios de prueba en el proceso penal*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2010. p. 37.

PÉREZ MANCERA J.R., *Derecho procesal penal mexicano*, México, 2015, pp. 145–146.

RODRÍGUEZ CAMPUZANO A., *Los acuerdos probatorios como mecanismo de despresurización de la controversia y su impacto en la etapa de juicio oral*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2016. p. 124

GONZÁLEZ LOGIER, D., “*Prueba hechos y verdad*” Manual de razonamiento probatorio, México, 2023, p.7.

Código Nacional de Procedimientos Penales